

Artículo original

Evolución de los conflictos sociales en la región Puno, 2004-2022

Evolution of social conflicts in the Puno region, 2004-2022

Illich Xavier Talavera Salas¹ 

Cómo citar: Talavera Salas, I. X. (2024). Evolución de los conflictos sociales en la región Puno, 2004-2022. *PURISUM. Revista de Investigación en Ciencias Sociales*, 1(3), 38–50 DOI: <https://doi.org/10.62785/prics.v1.i3.12>

Recibido: 20/05/2024 | **Aceptado:** 20/06/2024 | **Publicado:** 01/07/2024

RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar la evolución de los conflictos sociales en la región de Puno durante el período 2004 y 2022. Se empleó una metodología cuantitativa, de carácter no experimental, descriptiva y longitudinal. Para la recolección de datos, se revisaron 214 informes mensuales de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el Perú. Los resultados indican un aumento significativo de los conflictos sociales desde 2004, alcanzando un pico de 22 casos en 2010, coincidiendo con la intensificación de las actividades mineras en la región. A partir de ese momento, los conflictos comenzaron a disminuir, especialmente después de 2010, aunque la región de Puno ha seguido enfrentando tensiones persistentes, particularmente relacionadas con el uso de los recursos naturales y la gestión del agua. En cuanto al estado de los conflictos sociales, predominó el conflicto activo con 15 casos en 2009 y 2010, para luego disminuir gradualmente en los años posteriores. Sin embargo, los conflictos latentes, aunque menos visibles, han permanecido a lo largo del tiempo con tensiones subyacentes. En términos de tipología los conflictos socioambientales han sido los más predominantes desde 2008 hasta 2022, con un alto número de casos (12) registrados entre 2012 y 2018. Se concluye que es urgente adoptar un enfoque de gestión participativa de los recursos naturales, en el que las comunidades locales desempeñen un papel central en la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de estos recursos. Además, es fundamental implementar un modelo de desarrollo inclusivo que promueva el diálogo social, garantice el respeto a los derechos de las comunidades locales y facilite la resolución pacífica de los conflictos.

Palabras clave: Conflictos sociales, gestión de recursos, gobernanza, socioambientales, minería.

¹ Autor de correspondencia: i.talavera@unaj.edu.pe | Universidad Nacional de Juliaca, Perú.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the evolution of social conflicts in the Puno region between 2004 and 2022. A quantitative, non-experimental, descriptive and longitudinal methodology was used. For data collection, 214 monthly reports of the Ombudsman's Office on social conflicts in Peru were reviewed. The results indicate a significant increase in social conflicts since 2004, reaching a peak of 22 cases in 2010, coinciding with the intensification of mining activities in the region. Thereafter, conflicts began to decrease, especially after 2010, although the Puno region has continued to face persistent tensions, particularly related to the use of natural resources and water management. Regarding the status of social conflicts, active conflict predominated with 15 cases in 2009 and 2010, and then gradually decreased in subsequent years. However, latent conflicts, although less visible, have remained over time with underlying tensions. In terms of typology socio-environmental conflicts have been the most predominant from 2008 to 2022, with a high number of cases (12) registered between 2012 and 2018. It is concluded that there is an urgent need to adopt a participatory natural resource management approach, in which local communities play a central role in decision-making on the use and management of these resources. In addition, it is essential to implement an inclusive development model that promotes social dialogue, guarantees respect for the rights of local communities and facilitates the peaceful resolution of conflicts.

Keywords: Social conflicts, resource management, governance, socio-environmental, mining.

INTRODUCCIÓN

La región de Puno, situada en el sur de Perú, ha sido escenario de múltiples protestas y movimientos sociales a lo largo de las últimas dos décadas, de los cuales han tenido un fuerte componente socioambiental relacionado con las actividades extractivas, como la minería (Bebbington, 2007; De Echave et al., 2009). Estos conflictos han involucrado tanto a la población local como a actores políticos y económicos de distintos niveles, desde el gobierno local hasta el gobierno central, e incluyen factores como el uso y la gestión de los recursos naturales, la distribución del poder, las demandas de desarrollo, así como las tensiones entre las autoridades locales, regionales y los ciudadanos (Cárdenas, 2009; Mendoza et al., 2014; Talavera Salas, 2019).

Diversos estudios previos han destacado que los conflictos sociales están frecuentemente vinculados a problemas socioambientales, como el acceso a la tierra, la contaminación de recursos naturales y la defensa del medio ambiente (Sánchez Vásquez et al., 2016; Talavera Salas, 2017; Tintaya, 2019; Zárata et al., 2020). A lo largo de este período, la minería, la agricultura y la gestión del agua han sido factores clave que han provocado la intensificación de los conflictos sociales, especialmente en áreas rurales donde las comunidades locales se sienten amenazadas por las actividades extractivas (Bebbington et al., 2007; De Echave et al., 2009).

Estos factores, que generan conflictos sociales, han influido de manera significativa en el incremento de las tensiones en la región de Puno, produciendo una serie de efectos negativos tanto a nivel local como nacional. La explotación de recursos naturales, ha sido uno de los principales motores de estos conflictos. La gestión inadecuada de los recursos naturales, sumada a la desigualdad socioeconómica y la falta de inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones, ha generado no solo tensiones sociales, sino también profundos impactos económicos y sociales. En este contexto, los conflictos sociales no son solo una manifestación de malestar, sino que también tienen repercusiones directas sobre la estabilidad económica y el desarrollo de la región y el país.

En primer lugar, la incertidumbre generada por los conflictos sociales afecta directamente la inversión económica. Las protestas, bloqueos de carreteras y paros exigen la atención del Estado y alteran la actividad económica, especialmente en sectores clave como la minería, la agricultura y el comercio local. Según diversos estudios (Bebbington, 2007; De Echave et al., 2009), las comunidades locales, al no ver beneficios directos de las industrias extractivas, se movilizan en defensa de sus derechos, lo que paraliza proyectos económicos importantes y genera una percepción negativa para los inversionistas nacionales e internacionales. Esto puede reducir la confianza empresarial, lo que resulta en una caída de la inversión en la región, afectando su capacidad de crecimiento y desarrollo a largo plazo.

Además, los conflictos sociales tienen un impacto negativo en el desarrollo local, especialmente en términos de infraestructura, empleo y acceso a servicios básicos. Las protestas y movilizaciones han generado retrasos en proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, plantas de tratamiento de agua y escuelas, lo que retrasa el progreso de la región y profundiza las desigualdades (Instituto Peruano de Economía, 2023). Según Castro Salvador (2013), cuando las comunidades sienten que sus demandas no son atendidas, optan por recurrir a la movilización social como medio de presión, lo que altera los planos de desarrollo a nivel local y regional.

Por otro lado, los conflictos socioambientales, que tienen como trasfondo la disputa por el acceso a los recursos naturales, también inciden de manera importante en la productividad agrícola. De acuerdo con Ibáñez (2020) y Zegarra et al. (2007), la contaminación ambiental genera una pérdida significativa en la productividad agrícola, lo que agudiza la pobreza y reduce las oportunidades económicas para las poblaciones afectadas. Desde una perspectiva nacional, estos conflictos también tienen implicaciones sobre el desarrollo económico global del Perú, ya que las regiones como Puno, que dependen de la explotación de recursos naturales, juegan un papel clave en la economía del país. La incertidumbre provocada por la falta de soluciones efectivas a los conflictos hace que el país pierda competitividad en sectores clave como la minería, que sigue siendo uno de los principales motores de su economía.

Aunque en los últimos años se han implementado políticas públicas y mecanismos de resolución de conflictos, como las mesas de diálogo y la promulgación de leyes de consulta previa, los conflictos sociales no han desaparecido y, en muchos

casos, continúan siendo intensos. Las protestas y movilizaciones siguen siendo una manifestación visible del malestar social, ya que las comunidades se sienten frustradas por la falta de soluciones efectivas a sus demandas de justicia social y ambiental (Muñoz Muñoz & Mercado García, 2023). Este contexto refleja cómo las políticas públicas no siempre han logrado abordar las raíces estructurales de los conflictos, que van más allá de las simples disputas por los recursos, sino que incluyen la desigualdad histórica y la exclusión de las comunidades en los procesos decisionales que afectan su futuro.

La evolución de los conflictos sociales en Puno entre 2004 y 2022 es de particular interés, ya que refleja las tensiones inherentes al modelo de desarrollo económico basado en la explotación de recursos naturales y la falta de soluciones satisfactorias para las demandas sociales de la población. En este sentido, entender la evolución de estos conflictos, su estado y tipología a lo largo del tiempo es fundamental para comprender las causas estructurales, las dinámicas de poder y las soluciones que podrían contribuir a la paz social en la región.

MATERIALES Y METODOS

El diseño de la investigación es no experimental, de alcance descriptivo y de corte longitudinal. El enfoque no experimental se refiere a que no se manipulan las variables estudiadas, sino que se observa la ocurrencia de los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural (Caballero Romero, 2014; Martínez & Benítez, 2016). La naturaleza descriptiva de este estudio permite la recopilación y organización de datos relacionados con los conflictos sociales sin intervenir en los mismos, con el fin de proporcionar una descripción precisa de los hechos ocurridos en la región de Puno entre 2004 y 2022. Además, el estudio tiene un corte longitudinal, lo que implica que se analizan las tendencias de los conflictos sociales a lo largo del tiempo, permitiendo observar cómo han evolucionado los mismos y detectar patrones o cambios significativos en la región durante el período de estudio.

Se empleó un muestreo por conveniencia, seleccionando la región de Puno, debido a que esta ha registrado el mayor número de casos de conflictos sociales en comparación con otras regiones del Perú en los últimos años, según los informes de la Defensoría del Pueblo.

La recolección de datos se realizó a partir de los informes oficiales de la Defensoría del Pueblo, que son accesibles en su sitio web oficial. La Defensoría del Pueblo es una entidad autónoma del Estado peruano que se encarga de proteger los derechos fundamentales de las personas y vigilar los conflictos sociales a nivel nacional (Defensoría del Pueblo, 2023). Los informes seleccionados fueron clasificados en cuatro categorías de conflictos: conflictos socioambientales, asuntos relacionados con el gobierno regional, asuntos con el gobierno local y otros tipos de conflictos. Para la selección de los informes, se utilizó una metodología de análisis documental, tal como lo sugieren autores como Yin (2003), quien argumenta que el análisis de

documentos es adecuado para realizar un estudio detallado y comprensivo de los fenómenos en contextos específicos, como los conflictos sociales.

Para el análisis cuantitativo, se emplearon estadísticas descriptivas que permitieron calcular la frecuencia de los conflictos en cada categoría a lo largo de los años. El software SPSS (v.26) fue utilizado para procesar los datos y realizar análisis de tendencia. Una limitación importante de este estudio fue la disponibilidad de datos completos. Aunque la Defensoría del Pueblo ha recopilado una gran cantidad de información sobre los conflictos sociales, no todos los conflictos fueron documentados con el mismo nivel de detalle.

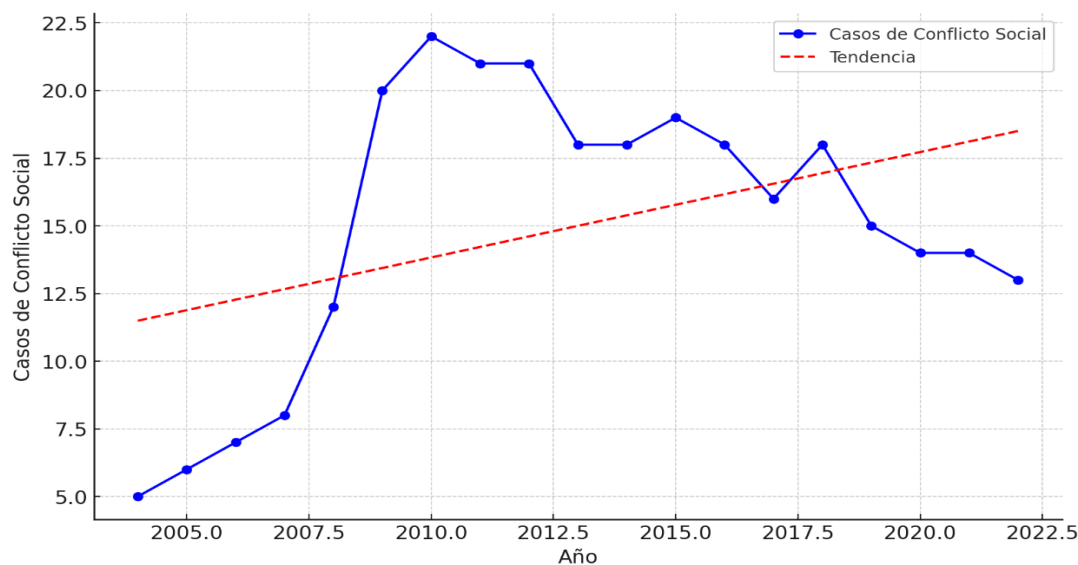
RESULTADOS

Se observa en la Figura 1 un aumento progresivo en los casos de conflicto social desde 2004 hasta 2010. En 2004, se registraron 5 casos, cifra que se incrementó significativamente hasta llegar a 22 en 2010. Esto podría reflejar un período de creciente tensión social o de mayor visibilidad de los conflictos en la región. A partir de 2010, el número de casos comienza a estabilizarse, oscilando entre 18 y 22 casos anuales hasta 2015, lo que sugiere que el nivel de conflicto social se mantuvo relativamente constante en este período.

Después de 2015, los casos empiezan a disminuir progresivamente. En 2017, se observa una disminución a 16 casos, y en 2019 la cifra cae a 15. Los años 2020, 2021 y 2022 presentan una continua baja en los conflictos sociales, con 14 y 13 casos respectivamente. Esto podría indicar una relativa disminución en los conflictos sociales o una mejor gestión y resolución de los mismos en los últimos años.

Figura 1

Evolución de los casos de conflictos sociales en la región de Puno, 2004-2022



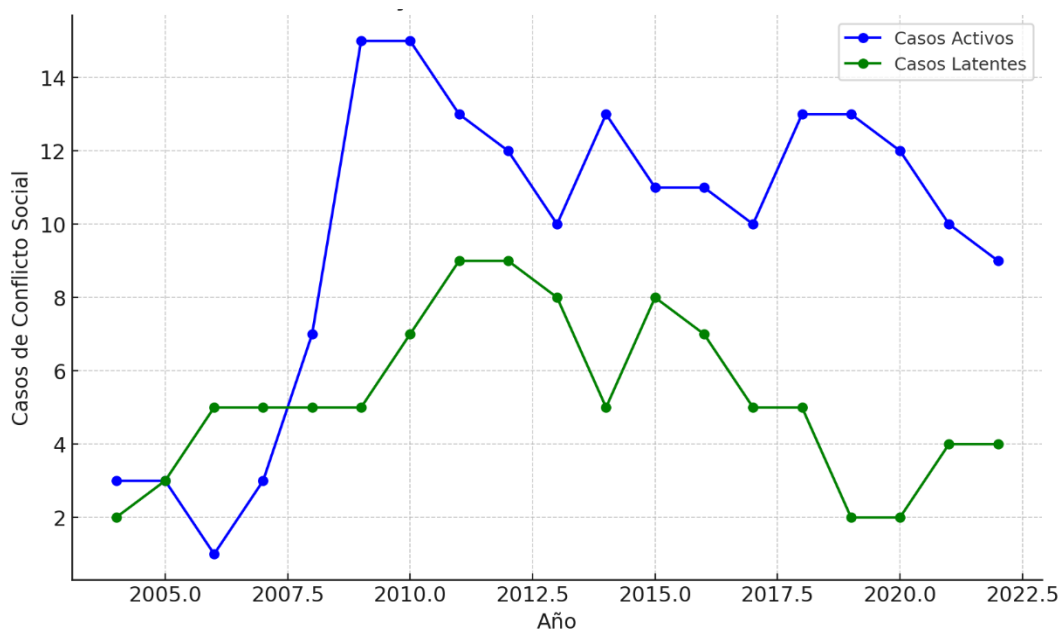
Nota: Datos obtenidos de los informes mensuales de la Defensoría del Pueblo.

En la Figura 2 se observa los casos de conflictividad social según el estado. Los casos activos son aquellos que están ocurriendo y requieren atención inmediata. Desde 2004 hasta 2010, los casos de activos muestran un patrón de aumento gradual. En 2008, se registró un aumento significativo, con 7 casos activos, seguido de un pico en 2009 y 2010, con 15 casos cada año. Este incremento podría estar relacionado con un período de alta tensión social o conflictos visibles, que se reflejan en las protestas y movimientos sociales en ese período. A partir de 2011, los casos activos comienzan a disminuir de manera progresiva. Sin embargo, los números siguen siendo relevantes hasta 2018, con 13 casos activos. En los últimos años (2020-2022), los casos activos continúan disminuyendo, llegando a 9 casos en 2022.

Por otro lado, los casos latentes son aquellos conflictos que aún no se han materializado, pero que podrían convertirse en activos si no se gestionan adecuadamente. Entre 2004 y 2010, los casos latentes fluctuaron, con un incremento notable en 2006 (5 casos), pero los picos más altos se dan en 2011 y 2012 con 9 casos cada año. Este período muestra una importante relación de conflictos que, aunque no se manifestaron de forma activa, tuvieron el potencial de generar tensiones sociales importantes. Desde 2013, los casos latentes disminuyen progresivamente, pero siguen siendo una preocupación. En 2019, se redujo significativamente a solo 2 casos latentes, lo que indica que la mayoría de los conflictos potenciales se resolvieron o se gestionaron de alguna manera. A partir de 2020, se mantiene en un nivel bajo con 2-4 casos latentes, lo que sugiere que los conflictos latentes han disminuido notablemente en la región.

Figura 2

Evolución de los casos de conflictos sociales según su estado en la región de Puno, 2004-2022



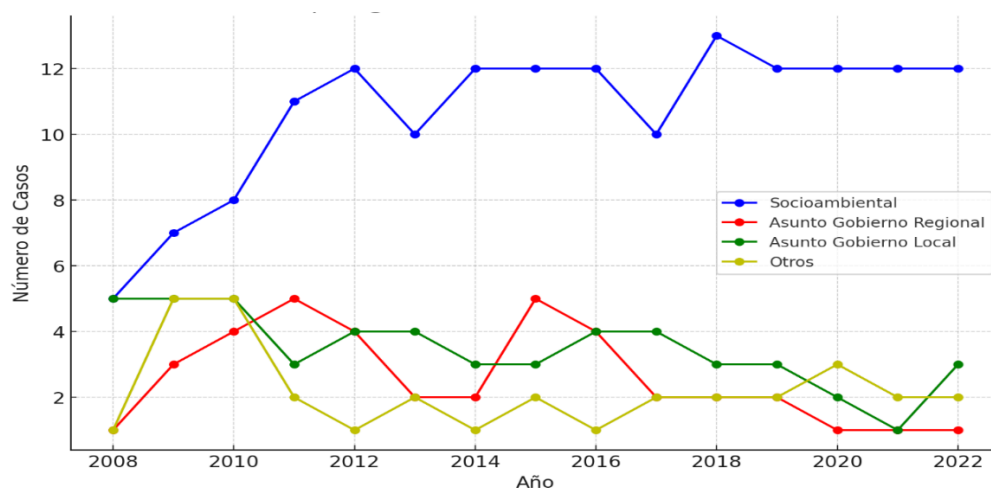
Nota: Datos obtenidos de los informes mensuales de la Defensoría del Pueblo.

La Figura 3 muestra la tipología de los casos analizados, donde los conflictos socioambientales son predominantemente la causa de los conflictos sociales en la región de Puno durante el período analizado. En 2008, los conflictos socioambientales fueron 5, con un incremento gradual en los años posteriores, alcanzando su punto máximo con 12 casos en 2012, y manteniéndose alto hasta 2018. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2019, 2020 y 2021, pero en 2022 los conflictos socioambientales siguen siendo relevantes, con 8 casos. Los conflictos por asuntos relacionados con el gobierno regional han sido relativamente bajos en comparación con los socioambientales. Sin embargo, se observa un aumento en estos conflictos en los años de alta conflictividad, como en 2009 y 2010, cuando se registraron 3 y 4 casos, respectivamente. A partir de 2011, los casos de conflictos con el gobierno regional disminuyen considerablemente, alcanzando su punto más bajo en 2016 y 2017 con solo 1 caso cada año. Los conflictos relacionados con el gobierno local han mostrado una fluctuación significativa durante el período observado. En 2008, estos conflictos fueron igualmente altos (5 casos) y continuaron siendo relevantes en los siguientes años. Sin embargo, desde 2010, los conflictos con el gobierno local comenzaron a disminuir progresivamente. En 2022, solo se registraron 1 caso, lo que indica una reducción de los conflictos con las autoridades locales. Los otros conflictos tienen una presencia variable en la Figura. A pesar de ser la categoría con menos casos en general, hay picos importantes en ciertos años. Por ejemplo, en 2009, se registraron 5 casos y, en 2022, los conflictos clasificados como "otros" aumentaron a 3. A pesar de esta variabilidad, en general esta categoría presenta menos relevancia en comparación con los otros tipos de conflicto. Los otros conflictos han fluctuado, pero no han tenido la misma intensidad que los conflictos socioambientales o los relacionados con el gobierno. Aunque algunos picos son notables, como en 2009 y 2022, esta categoría sigue siendo menor en comparación con las otras.

Los conflictos relacionados con el gobierno local han mostrado una fluctuación significativa durante el período observado. En 2008, estos conflictos fueron igualmente altos (5 casos) y continuaron siendo relevantes en los siguientes años. Sin embargo, desde 2010, los conflictos con el gobierno local comenzaron a disminuir progresivamente. En 2022, solo se registraron 1 caso, lo que indica una reducción de los conflictos con las autoridades locales. Los otros conflictos tienen una presencia variable en la Figura. A pesar de ser la categoría con menos casos en general, hay picos importantes en ciertos años. Por ejemplo, en 2009, se registraron 5 casos y, en 2022, los conflictos clasificados como "otros" aumentaron a 3. A pesar de esta variabilidad, en general esta categoría presenta menos relevancia en comparación con los otros tipos de conflicto. Los otros conflictos han fluctuado, pero no han tenido la misma intensidad que los conflictos socioambientales o los relacionados con el gobierno. Aunque algunos picos son notables, como en 2009 y 2022, esta categoría sigue siendo menor en comparación con las otras.

Figura 3

Evolución de casos de conflictos sociales por tipo en la región de Puno, 2008-2022



Nota: Datos obtenidos de los informes mensuales de la Defensoría del Pueblo.

DISCUSIÓN

Los resultados evidencian un aumento notable de casos de conflictos sociales en la región Puno desde 2004 hasta 2010. En particular, el incremento más significativo ocurrió entre 2008 y 2010, donde los casos llegaron a 22 en 2010, lo que refleja un periodo de creciente tensión en la región. Este aumento en los conflictos sociales coincide con el auge de la minería en la región y las tensiones generadas por la explotación de recursos naturales (Mendoza & De Echave, 2016). Según Flores-Unzaga (2019) y Talavera Salas (2019), el conflicto social generado por los impactos de la minería, la contaminación del agua y la disputa por tierras fueron factores clave en este período de alta conflictividad. La relación entre el aumento de los conflictos y las actividades extractivas está bien documentada en la literatura, como señalan De Echave et al. (2009), quienes argumentan que los proyectos mineros en el sur de Perú, particularmente en Puno, han intensificado las tensiones sociales debido a las preocupaciones ambientales y la falta de beneficios para las comunidades locales.

A partir de 2011, los casos de conflicto social en la región de Puno comienzan a estabilizarse, con una leve disminución en la incidencia de estos conflictos en los últimos años, particularmente entre 2020 y 2022. Esta tendencia podría indicar una mejora en la gestión de los conflictos, lo cual podría estar relacionado con la implementación más efectiva de mecanismos de diálogo social y la introducción de estrategias de mediación para resolver las disputas entre las comunidades y las autoridades. Sin embargo, también podría reflejar una menor visibilidad de los conflictos en los medios de comunicación, que han dejado de enfocarse tanto en los incidentes, en medida que la atención pública se desvía hacia otros temas. Además, es posible que esta disminución sea un indicativo de que las estrategias de protesta han comenzado a agotarse (López, 2015).

Otro dato revelador, está relacionada con el estado de los conflictos sociales, donde en 2008, los conflictos latentes eran más prevalentes que los activos, pero en los años posteriores, los conflictos latentes se hicieron más comunes, lo que refleja una fase de conflictos "dormidos", pero que podrían resurgir en cualquier momento si no se gestionan adecuadamente (Huamaní et al., 2012). En 2009 y 2010, la cantidad de conflictos activos fue especialmente alta, coincidiendo con un período de alta tensión política y social en el país. El análisis de estos datos sugiere que muchos de los conflictos en Puno eran manifestaciones de descontento que, aunque no siempre se materializaban en protestas o disturbios, estaban presentes como un malestar subyacente entre las comunidades afectadas (De Echave et al., 2014).

A medida que avanzaba la década de 2010, los conflictos sociales en la región de Puno comenzaron a disminuir, lo que podría interpretarse como un efecto positivo de las políticas públicas implementadas para la resolución de disputas, como el fortalecimiento de mecanismos de diálogo social y mediación, o bien como un reflejo de un cambio en las dinámicas de protesta, donde las comunidades optan por métodos de movilización menos visibles o intensos (Zeisser et al., 2015). No obstante, a pesar de esta aparente disminución, la presencia persistente de conflictos latentes, como se ha observado desde 2013, sugiere que las tensiones subyacentes no han sido

completamente resueltas. Estas tensiones, aunque menos visibles, siguen siendo un caldo de cultivo para futuros conflictos si no se abordan de manera estructural. En particular, la falta de participación efectiva de las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales y las políticas públicas sigue siendo un factor crucial. Como destacan Zárate et al. (2020), si las comunidades no se sienten plenamente involucradas en los procesos decisionales que afectan sus vidas, las tensiones podrían resurgir con fuerza, desencadenando nuevos conflictos o profundizando los ya existentes. Esto pone de manifiesto que, aunque la disminución de los conflictos puede ser vista como un avance, las raíces estructurales del malestar social siguen presentes y requieren una atención más profunda para evitar su reactivación.

Así mismo, el estudio señala una clasificación detallada de los conflictos en Puno según su tipología: socioambientales, asuntos de gobierno regional, asuntos de gobierno local y otros conflictos. La categoría más destacada fue la de conflictos socioambientales, que continuaron siendo el principal tipo de conflicto social a lo largo del período de estudio. En 2008, los conflictos socioambientales alcanzaron 5 casos, pero la cifra creció progresivamente hasta llegar a 12 casos en 2012, manteniéndose alta hasta 2018. Estos conflictos, como menciona Castro Salvador (2013), están ligados principalmente a la disputa por los recursos naturales, la contaminación ambiental y los efectos negativos de la minería en las comunidades locales. En Puno, estos conflictos a menudo involucran la oposición de las comunidades locales a los proyectos mineros y la falta de compensación adecuada por los impactos ambientales.

Los conflictos con el gobierno regional y el gobierno local, aunque representaron una menor proporción, también mostraron variaciones significativas en la década de 2010. Estos conflictos se relacionan principalmente con las demandas de los ciudadanos sobre la mejora de los servicios públicos y la distribución de los recursos. Se observa una caída en los casos relacionados con el gobierno local y regional, lo que podría indicar una mayor estabilidad política o quizás una mayor eficacia en la gestión de los problemas a nivel local. No obstante, la disminución de los conflictos políticos puede ser un reflejo de un estancamiento en las estrategias de movilización y la falta de respuesta efectiva a las demandas sociales.

En la categoría de otros conflictos, se incluyen una variedad de problemas, según la tipología de la Defensoría del Pueblo, que abarcan aspectos comunales, laborales, de demarcación territorial, así como el cultivo ilegal de coca, disputas electorales, entre otros. Aunque estos conflictos representan una proporción menor en comparación con los socioambientales, presentan picos significativos en ciertos años, como en 2009 y 2022, lo que sugiere la presencia de factores adicionales que no siempre se capturan en las categorías más tradicionales. Estos conflictos, aunque menos cuantificables, reflejan tensiones económicas, culturales y de identidad que a menudo son el resultado de cambios sociales profundos o de problemas no resueltos a nivel local.

Finalmente, los conflictos socioambientales y las tensiones relacionadas con el acceso y control de los recursos naturales son los principales factores que explican la

prevalencia de los conflictos en la región de Puno. La minería, la agricultura y la gestión del agua siguen siendo los ejes de las disputas. Estos conflictos, como indica, Chiarella (2009) son exacerbados por la falta de mecanismos eficaces para la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos. Además, la desigualdad socioeconómica en la región, sumada a la exclusión política de las comunidades locales, ha contribuido a la persistencia de los conflictos a lo largo del tiempo. El diálogo social y la gestión participativa de los recursos son esenciales para la resolución de estos conflictos. A medida que las comunidades se sienten más incluidas en el proceso de toma de decisiones, las tensiones pueden reducirse significativamente. El rol de los gobiernos, tanto locales como regionales, debe enfocarse en fortalecer la capacidad de mediación y asegurar que las políticas públicas no solo atiendan las necesidades económicas, sino que también respeten los derechos ambientales y sociales de las poblaciones locales.

CONCLUSIONES

En conclusión, los conflictos sociales en la región de Puno entre 2004 y 2022 han estado profundamente marcados por tensiones socioambientales derivadas de la explotación de recursos naturales, especialmente la minería. Estos conflictos han involucrado a una variedad de actores, desde comunidades locales hasta autoridades políticas y empresas, con la gestión de los recursos naturales, la distribución del poder y las demandas de desarrollo como temas centrales. A lo largo de los años, la región ha experimentado una evolución en la naturaleza de los conflictos, con un aumento significativo durante los primeros años del período de estudio, seguido de una estabilización parcial en los últimos años. Sin embargo, la persistencia de conflictos latentes muestra que las tensiones no se han resuelto completamente, sino que han cambiado de forma y escala.

Además, los resultados indican que, aunque se han implementado políticas y mecanismos para abordar los conflictos, estos han tenido un impacto limitado en su resolución efectiva. Factores como la falta de participación comunitaria en la toma de decisiones, la desigualdad socioeconómica y la mala gestión de los recursos naturales han continuado siendo barreras clave para la resolución pacífica de los conflictos. La gestión inclusiva y participativa, junto con una mejor distribución de los beneficios de los recursos naturales, es fundamental para la construcción de una paz duradera y el desarrollo sostenible en la región. Este estudio subraya la necesidad de enfoques más integrales y coordinados que consideren las necesidades de las comunidades locales y promuevan el diálogo social como herramienta esencial para superar las tensiones.

Conflicto de intereses: El autor declara que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.

Financiación: No ha habido financiación.

REFERENCIAS

- Bebbington, A. (2007). Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras. In A. Bebbington (Ed.), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales* (Primera ed, pp. 23–46). IEP; CEPES. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/106430-opac>
- Bebbington, A., Connarty, M., Coxshall, W., O’Shaughnessy, H., & Williams, M. (2007). *Minería y desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura* (Número 1; Primera ed, Serie Minería y Sociedad). <https://perusupportgroup.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Mineria-y-Desarrollo-en-Peru-con-especial-referencia-al-Proyecto-Rio-Blanco-Piura.pdf>
- Caballero Romero, A. (2014). *Metodología integral innovadora para planes y tesis. La metodología del cómo formularlos* (Primera ed). Learning Cengage. <https://universoabierto.org/2021/03/18/metodologia-integral-innovadora-para-planes-y-tesis/>
- Cárdenas, M. K. (2009, August). Conflictos sociales y desarrollo: el caso peruano. *SEPIA XIII*. <https://core.ac.uk/download/pdf/48023994.pdf>
- Castro Salvador, S. (2013). *Pobreza, minería y conflictos socioambientales en el Perú* (Número 1; Primera ed, Cuadernos de Investigación Kawsaypacha). <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51909>
- Chiarella, J. (2009, July). La participación como mecanismo para el uso y manejo de los recursos naturales. *Argumentos. Revista de Análisis y Crítica*. <https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/la-participacion-como-mecanismo-para-el-uso-y-manejo-de-los-recursos-naturales/>
- De Echave, J., Diez, A., Huber, L., Revesz, B., Ricard, X., & Tanaka, M. (2009). *Minería y conflicto social* (Número 5; Primera ed, Serie Minería y Sociedad). IEP; CIPCA; CBC; CIES. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/iep/20170328023709/pdf_177.pdf
- De Echave, J., Passuni, S., & Mendoza, A. (2014). *La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurímac* (Primera ed). CooperAccion; Red Muqui; Broederlijk Delen. <https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/00040-La-Mineria-en-el-Sur-Andino-Cusco-y-Apurimac.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2023). *Defensoría del Pueblo. Adjuntía para la prevencino de conflictos sociales y la gobernabilidad. Reportes de conflicto social 2004-2022*. <http://www.defensoria.gob.pe>
- Flores Unzaga, C. (2019). *¿Milagro apurimeño? La minería y el debate del crecimiento y desarrollo local* (Primera ed). CooperAcción; OXFAM; GJF. <https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2019/04/17631-Milagro-apurimeño-web.pdf>
- Huamaní, G., Macassi, S., Alegría, J., & Rojas, T. (2012). *Hacia una mejor gestión de los conflictos socioambientales en el Perú* (Primera ed). Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). <https://www.iproga.org.pe/descarga/gestionconflictos.pdf>
- Ibáñez, C. (2020). *Minería y pobreza en las regiones la libertad, Áncash y Cajamarca, periodo:*

- 2009 - 2019 [Tesis de Licenciatura. Universidad Privada Antenor Orrego]. <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/6752>
- Instituto Peruano de Economía. (2023). *¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería* (Primera ed). Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. <https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2023/09/El-impacto-economico-de-los-conflictos-sociales-y-la-tramitologia-en-la-mineria.pdf>
- López, M. (2015). Ya marchamos... pero no solucionan el problema": Protesta social y respuestas gubernamentales en torno a la inseguridad. *Perfiles Latinoamericanos*, 23(46), 91–120. <https://doi.org/10.18504/pl2346-091-2015>
- Martínez, H., & Benítez, L. (2016). *Metodología de la investigación social I*. CENGAGE Learning
- Mendoza, A., & De Echave, J. (2016). *¿Pagaron lo justo?: Política fiscal peruana en tiempos del Boom minero* (Primera ed). CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo. <https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/Política-fiscal-peruana-en-tiempos-del-boom-minero.pdf>
- Mendoza, A., Passuni, S., & De Echave, J. (2014). *La Minería en el Sur Andino: El caso de Apurímac* (Primera ed). CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo. <https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/La-Minería-en-el-Sur-Andino-Apurimac.pdf>
- Muñoz Muñoz, D., & Mercado García, Y. C. (2023). Intervención del estado en los conflictos socio-ambientales en el Perú. *Vox Juris*, 41(2), 11–20. <https://doi.org/10.24265/voxjuris.2023.v41n2.02>
- Sánchez Vásquez, L., Espinosa, M., & Eguiguren, M. (2016). Percepción de conflictos socio-ambientales en zonas mineras: El Caso del Proyecto Mirador en Ecuador. *Ambiente & Sociedade*, 19(2), 23–44. <https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC129708V1922016>
- Talavera Salas, I. (2017). *Factores condicionantes que generan conflictos socioambientales: Caso Unidad Minera San Rafael – Antauta - Melgar – 2016* [Tesis de maestría. Universidad Nacional del Altiplano]. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/6777>
- Talavera Salas, I. (2019). Condicionantes Asociados al Surgimiento de Conflictos Socioambientales en el Distrito de Antauta - Puno 2017. *ÑAWPARISUN - Revista de Investigación Científica*, 1(2), 73–82. <http://www.unaj.edu.pe/revista/index.php/vpin/article/view/34/18>
- Tintaya, O. (2019). *Conflictos socioambientales generados por la empresa Bear Creek Company en la comunidad campesina de Chacaconiza - Conari* [Universidad Nacional del Altiplano. Tesis de licenciatura]. http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12303/Yana_Aydee_Quispe_Patricia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Yin, R. (2003). *Investigación sobre Estudios de Casos. Diseño y Métodos*. Applied Social Research Methods Series. http://www.polipub.org/documentos/YIN_ROBERT.pdf

- Zárate, R., Vélez, C., & Caballero, J. (2020). La industria extractiva en América Latina, su incidencia y los conflictos socioambientales derivados del sector minero e hidrocarburos. *Revista Espacios*, 41(24), 154–167. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n24/a20v41n24p13.pdf>
- Zegarra, E., Orihuela, J., & Paredes, M. (2007). *Minería y economía de los hogares en la sierra peruana: Impactos y espacios de conflicto* (Documento de trabajo N° 51; Investigaciones Breves). <https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ddt51.pdf>
- Zeisser, M., De Echave, J., Schaeffer, V., & Astocondor, M. (2015). *La experiencia de la mesa de diálogo en Espinar 2012-2013: ¿Un nuevo modelo de gestión de conflicto socio ambiental?* (Primera ed). Fordfoundation: OXFAM; CooperAccion. <https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/00-MESA-DE-DIALOGO-FINAL.pdf>



Copyright: © 2024 Instituto Latinoamericano de Investigación y Desarrollo Social – ILADESA. Enviado para su publicación en acceso abierto bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)